

Por una nueva estrategia política de la izquierda alejada de falsos mitos

El tema de la vía actual más idónea de conquistar el poder político, como el de la manera más efectiva para que la izquierda¹ pueda llegar al gobierno, está aún por definir también en América Latina. Y el problema no está en polemizar en detalle si al régimen a que se pretende transitar es hacia uno socialista o a uno de carácter democrático burgués más "plenamente" democrático y participativo, sino en aceptar que de cualquier manera estamos hablando, en primera instancia, de una transición hacia un gobierno que asegure en él, primero la instalación de los verdaderos sectores populares, y después su permanencia.

Haciendo un poco de historia

Los intentos prácticos en Latinoamérica por desplazar del gobierno al relevo constante de las clases pudientes han sido múltiples, y variados también se han mostrado los caminos teóricos para lograrlo, pero en su gran mayoría han fracasado. Durante los primeros 80 años del siglo XX esto se expresó, en nuestro continente, en la realización de revoluciones y estallidos sociales en México (1910-1917), Cuba (1933 y 1959), Guatemala (1944-1954), Nicaragua (1979-1990), El Salvador (1932 y 1981), Costa Rica (1948), Panamá (1968-1980), Venezuela (1945-1948), Chile (1931-1932, 1970-1973), Perú (1968-1975), Bolivia (1952, 1969-1971), Brasil (1930, 1960-1964), Argentina (1928-1930, 1946-1955), Guyana, República Dominicana (1965) y Granada (1979-1983).

Aunque es conocido que las revoluciones son expresión de la época y de los problemas internos de cada país, en América Latina algunas de ellas parecen haber absorbido en sí la experiencia de muchas otras. Tales fueron los casos de las realizadas en Guatemala, que fracasó en 1954, de la que tuvo lugar en República Dominicana en 1965 y de la que colapsó en Perú diez años después.

La revolución guatemalteca, como es conocido, comenzó en octubre de 1944 cuando grandes masas de la población, con la participación de las unidades del ejército, derrocaron la dictadura del general Jorge Ubico y formaron un gobierno revolucionario

¹ Bajo este término existen muchas definiciones, pero por las características de este trabajo, durante todo el texto solo asumiremos aquella que lo considera una posición referencial tradicionalmente opuesta a las políticas económico-sociales procapitalistas de los partidos de derecha. Aunque en los últimos años este movimiento propone diferentes tácticas de lucha que incluyen reformas dentro del propio sistema capitalista, al menos en sus

provisional. En lo fundamental, sus fuerzas motrices principales, según el lenguaje de la época, fueron las capas pequeñoburguesas de la ciudad (estudiantes, empleados, maestros, profesores universitarios y oficiales jóvenes), pero también participaron obreros y ulteriormente parte del campesinado.

La radicalización del proceso sin embargo, definitivamente se reveló, con la disolución del parlamento y la promulgación de una nueva Constitución en marzo de 1945. Ella proclamó libertades y derechos democráticos, los derechos políticos de las mujeres, refrendó los derechos de la población al trabajo, a la seguridad social, la enseñanza gratuita, proclamó el mejoramiento de la situación económica, social y cultural de los indígenas y, entre otros cambios importantes, legalizó la labor de los partidos políticos e introdujo el sufragio universal obligatorio. Pero mediante esa carta legislativa, el nuevo gobierno aplicó otras medidas no muy del agrado de la reacción interna y externa: censuró el latifundio, consideró la posibilidad de expropiar la propiedad privada en bien de la sociedad y proclamó todas las riquezas naturales del país patrimonio soberano de la nación.

En República Dominicana, donde se produjo más que una simple revolución democrática, una cruenta guerra civil, ni siquiera hubo tiempo de profundizar tanto. A pesar de que por esa época el Partido Socialista Popular (nombre que adoptó el Partido Comunista Dominicano entre 1946-1965) era pequeño y estaba considerablemente aislado, la reacción interna, alentada por el gobierno de los Estados Unidos, arguyó una supuesta debilidad del gobierno ante la "creciente amenaza comunista" y en 1963 derrocó al gabinete del entonces presidente Juan Bosch. Esta fue la respuesta al inicio de un proceso de democratización de la vida social en el país.

Como consecuencia de aquella reacción, entre abril y agosto de 1965, el movimiento militar de los constitucionalistas, encabezados por el coronel Francisco Caamaño, junto a obreros, empleados y estudiantes entre otros, se levantó contra los usurpadores del poder supremo del Estado para restablecer en el gobierno al otrora Presidente constitucionalmente electo. Pero este intento de cambios profundos, como otros en América Latina, también fracasó. La lealtad de gran parte del ejército dominicano y la policía a los golpistas y la intervención militar extranjera de 42 mil hombres, junto a la

débil organización de la clase obrera y la pasividad del campesinado, condicionaron el fin de la rebelión popular.

Indudablemente una de las revoluciones más duraderas y radicales en nuestro continente, fue la dirigida por el general Juan Velazco Alvarado en Perú, desde fines de 1968. A partir del 3 de octubre de ese año, y de la deposición del entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, el país pareció cambiar radicalmente.

El paso trascendental que definió el profundo proyecto transformador del nuevo gobierno, fue la emisión el 27 de junio de 1969, de una reforma agraria en extremo radical. Además de comenzar a ejecutar una equitativa distribución de la tierra a favor de quienes la trabajaban, se pronunció por preservar la integridad de las grandes unidades productivas y por estimular la organización de cooperativas en las antiguas comunidades agrícolas y entre los campesinos que recibieron parcelas.

Desde el punto de vista industrial, se nacionalizó el cobre, el hierro y el petróleo, y los grandes servicios de comunicación y transporte también fueron apartados de las manos extranjeras. Esas medidas, junto al paso del comercio a manos del Estado, creó un importante sector estatal nacional que estableció un avance sui géneris hacia nuevas formas de propiedad en Perú. Pero estas transformaciones nada superficiales, desde el principio contaron con el rechazo del gobierno norteamericano, y a medida que se fueron haciendo más radicales, estimulaban el incremento de la oposición a ellas.

A la altura de 1975, con la agravación de la enfermedad de Velazco Alvarado, la situación cambió. El carácter elitista del proceso que él encabezó, y su temor a la actividad espontánea y no organizada de los obreros con los campesinos y otros sectores sociales del país, cerró ese capítulo de la revolución peruana, y lo pasó a la historia como el sólo inicio de otro proceso revolucionario democrático inacabado.

Estas tres experiencias, ilustrativas de los primeros 75 años del siglo XX latinoamericano, son a su vez representativas de tres elementos importantes. Primero, el que sugiere que no ha sido posible *iniciar* cambios sociales profundos por parte de las fuerzas populares, sin una previa teorización y una politización de esos procesos desde una óptica e instrumentación conscientemente socialista. Segundo, el que demuestra que un proceso revolucionario puede ser frustrado por contradicciones

dentro de las propias filas revolucionarias tanto cuando los sectores populares llegan al gobierno por una vía democrática, como mediante un accionar violento utilizando las armas. Y tercero, el que enseña que la reacción interna y externa no respeta ni siquiera los procesos revolucionarios respaldados por una constitución aprobada en votación popular, y que por tanto si una revolución (legitimada o no constitucionalmente) se inicia, debe ser capaz de defenderse.

Las conclusiones mencionadas arriba se enriquecieron con otros dos ejemplos que trataron de consolidar sus gobiernos presentando un enfoque distinto.

En 1970 con la asunción al gobierno por parte de Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile, se teorizó acerca de la posibilidad de una vía pacífica al socialismo en nuestro continente, pero su enajenación de las fuerzas armadas fue considerada una causa importante de su derrota. Contrariamente a ese caso, la experiencia nicaraguense, encabezada por un ejército vinculado orgánicamente al proceso revolucionario, en 1990 intentó legitimar su revolución de raíz profundamente popular, mediante un sistema electoral democrático-burgués, que condujo a resultados inversos a los deseados por las fuerzas sandinistas.

Pero existe otro elemento importante, a su vez representativo de la historia revolucionaria contemporánea latinoamericana, que explica parte de las causas de todos esos fracasos y que puede constituir un rasero metodológico clave para calibrar la autenticidad y radicalidad de los intentos democráticos populares que han nacido en nuestro continente: la posición del gobierno norteamericano ante ellos.

La estrategia exterior de los Estados Unidos en torno a los problemas de gobierno y poder político en América Latina constituye un enfoque objetivo (metodológicamente pudiera decirse que hasta marxista) pero en detrimento de las revoluciones populares. Por un lado apoyan el cambio de gobierno cuando sus clientes existentes han perdido poder, legitimidad o se ven amenazados por acciones populares masivas, por otro rechazan los movimientos de masas que desde la oposición proponen el cambio de gobierno y de sus más representativas instituciones estatales, y en último lugar, favorecen un cambio de Estado o de gobierno revolucionario establecido (según el grado de transformaciones institucionales logradas), cuando la intención es revertir los

procesos políticos que se han mostrado en la práctica como verdaderas tentativas antisistema capitalista.

Esta posición de los Estados Unidos se manifiesta como un claro enfoque clasista en torno a quién tiene el poder y a quién hay que arrebatárselo. Pero como instrumento de análisis no puede ser entendido según la degeneración ulterior (vinculada al "socialismo real") de que fue objeto el concepto de clases de Marx que concebía, hasta hace pocos años, a los obreros como el único y más revolucionario sector social encargado del cambio de Estado. El gobierno de los Estados Unidos y todas sus dependencias estratégicas asumen, con total razón, que todo sector, grupo o movimiento revolucionario de masas (contrario a las posiciones tradicionales de la derecha), que alcance un gobierno, inevitablemente, más tarde o más temprano, si es consecuente, será el protagonista al menos de un fuerte estado nacional burgués, o de una confrontación diametral contra los actuales detentadores del Estado capitalista. Es decir, contra la parte más reaccionaria de la tradicionalmente llamada burguesía nacional que cada vez más se diluye o se transnacionaliza y sobre todo, contra las empresas transnacionales que apoyan sus respectivos intereses en los cuerpos militares, la policía, los órganos judiciales, el Banco Central y otras entidades económicas, representativos de personajes e instituciones no elegibles por el voto popular.

Tales postulados en la estrategia imperialista explican la necesidad de aplicar todos los recursos posibles para derrocar a las fuerzas revolucionarias de sus respectivos gobiernos, o para impedir el arribo de ellas a este, desde estimular la reacción interna y externa llegando a financiar, a la contrarrevolución, hasta promover la intervención armada extranjera.

Contrariamente a lo que tanto nos ha costado comprender a las fuerzas de izquierda, la estrategia norteamericana siempre ha visto el "peligro", el sujeto social de transformación revolucionaria, tanto en los obreros, como en los grupos militares revolucionarios, los empleados, los campesinos, los maestros, los estudiantes u otras capas en algún sentido marginadas. Y está claro, todos esos sectores sociales, son percibidos por el imperio como reales o potenciales sujetos antisistema y por tanto hay que colapsarlos, o al menos reencausarlos.

En los últimos tiempos, esta posición de rechazo a todo lo que “huela” a popular, ha condicionado la aparición de un gran movimiento antiglobalizador de la pobreza, el desempleo, la discriminación y las exclusiones, que coloca como centro de su lucha la erradicación de las políticas de ajuste neoliberales no sólo dentro de los llamados países periféricos, sino también de los centrales.

Tales acciones que tuvieron lugar en muchas partes del mundo, se desarrollaron en el 2001 comenzando por el rechazo de miles de manifestantes al Foro Económico Social Mundial, celebrado en Davos, Suiza, en el mes de enero, hasta las protestas de más de 30 000 personas ante la Cumbre de la Unión Europea, el pasado 15 de diciembre, en Bruselas.

Una clara respuesta a este tipo de manifestación popular, dentro de los marcos de América Latina, fue el ejercicio militar conjunto que entre agosto y septiembre de 2001 realizaron nueve países americanos en la provincia de Salta, Argentina. En ese evento, bajo el nombre de Operación Cabañas 2001 y con el financiamiento y la dirección de los Estados Unidos, se entrenó a fuerzas militares de esos países para repeler acciones populares internas que atentaran contra (lo que convenientemente entienden por) la estabilidad democrática respectiva.

Este “entrenamiento”, dentro del marco de las políticas neoliberales aplicadas que condicionaron la crisis política y económica que azota a Argentina desde 1998, fue lo que presumiblemente facilitó los treinta muertos que aparecieron en el país en los últimos días del pasado año.

Si comprendemos la estrategia norteamericana con esta lógica, de impedir por cualquier vía que sectores, fuerzas o líderes políticos revolucionarios (o potencialmente a serlos) puedan acceder al gobierno o logren hacer transformaciones ya dentro de él, entonces asimismo pudiéramos considerar esa estrategia como el elemento metodológico que nos induzca a entender por qué es necesario aliar a todas las fuerza revolucionarias en aras de destruir el sistema capitalista a más largo plazo, o incluso de reformarlo de sus actuales males en una primera etapa.

En la antesala y primeros años del siglo XXI, en un posible esfuerzo por considerar ese “principio metodológico” de la estrategia de Washington o derivado de ella, y por evitar enfrentamientos diametrales a los sectores tradicionales pudientes, el presidente de la

República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez (reelecto en el año 2000 para ese cargo) ha iniciado lo que llama una revolución democrática que trata de legitimar su gobierno y las transformaciones sociales que promueve utilizando sistemáticamente el voto popular.

Sin embargo, junto a este último ejemplo vamos a llamarle más "empecinado", en el sentido de que no renuncia ante la oposición creciente y lejos de ello, incrementa su discurso revolucionario contra la derecha, hace poco más de 10 años ha aparecido un nuevo intento, también llamado por muchos de centroizquierda, por alcanzar el gobierno. A él se circunscriben en Chile los partidos miembros de la Concertación por la Democracia,² en Argentina el Frente por un País Solidario (FREPASO),³ en Brasil el Partido del Trabajo,⁴ y en México el Partido de la Revolución Democrática (PRD),⁵ entre otros, que como el propio PT brasileño tampoco ha logrado conquistar el gobierno nacional.

Estas agrupaciones, como varias no mencionadas en esos y otros países, se identifican con el documento que se autodenomina Consenso de Buenos Aires, firmado en 1996, que justifica su posición de rechazo al socialismo, con la consideración de que no hay política económica radicalmente alternativa a la actual o con la idea de que el precio de la explosión del modelo vigente, es más grande que su reformación intrasistema.

Salvando la posición del PT que fundamenta su oposición al socialismo no como sistema, sino como instrumento económico que implique un proceso directo e inmediato de estatización, la práctica ha demostrado que la característica de apegarse

² La Concertación por la Democracia se fundó en 1989, como intento de evitar la reelección de Augusto Pinochet. Está integrada por el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Socialdemócrata Radical y el Partido por la Democracia.

³ FREPASO. Es una agrupación de pequeños partidos de centroizquierda fundada en 1994. Está liderada por Carlos "Chacho" Álvarez, ex vicepresidente del país que renunció a su cargo a mediados de 2000 por sonado escándalo de corrupción en el Senado. Este acontecimiento, y el deterioro económico y social del país, particularmente profundo desde 1998, condujo a un debilitamiento del respaldo popular al FREPASO como aliado de la Unión Cívica Radical en el gobierno (conquistado conjuntamente en 1999) y a la estrepitosa caída de este último a fines de diciembre de 2001.

⁴ PT. Fundado en 1980. Su actual presidente es José Dirceu. El PT que ha fracasado en las últimas tres elecciones presidenciales, hoy presenta nuevamente a José Ignacio "Lula" da Silva como candidato a la presidencia para el 2003 y tiene, según las últimas encuestas, opciones importantes de victoria. A diferencia de otras organizaciones de centroizquierda, el PT tiene un proyecto político a largo plazo más definido hacia el socialismo y cuenta con varias experiencias de gobiernos locales muy importantes y exitosas.

⁵ PRD. Se fundó con el fin de consolidar la oposición de izquierda, agrupada en el Frente Democrático Nacional (FDN) que respaldó a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1988. En sus inicios estuvo

solo a pequeñas reformas capitalistas, debilita la unidad y poder de actuación de la izquierda. Esta táctica hace vulnerable a las fuerzas revolucionarias, ubicadas más a la izquierda dentro del espectro político de las más amplias alianzas, a subordinar sus programas de transformación a los puntos de vista de la derecha.

Todos estos disímiles intentos de organización y acción esbozados hasta aquí, contribuyen no solo a mantener quebrada la formulación teórica de lo que constituye hoy la izquierda, como movimiento referencial cohesionado y opuesto a las políticas tradicionales de la derecha, sino que crea las condiciones necesarias para incrementar y acelerar su completa ruptura. Y no es un problema de ausencia de tolerancia al asumir que por una simple causa de sectarismo psicológico, todas las variables de solución rechazan la posibilidad de la otra, sino que muchas de ellas excluyen al contrario, al considerar "razonablemente de izquierda" solo a aquellas organizaciones que promueven alcanzar el gobierno mediante las fuerzas propias, o contrariamente a ese principio, a aquellas que conciben posible cumplir sus programas, aliándose, en minoría, a fuerzas de centro e incluso de derecha.

El dilema más común que hoy se presenta a la izquierda (aunque ciertamente no típico del PT brasileño y del Frente Amplio uruguayo), está vinculado al factor tiempo y la estrategia para alcanzar los gobiernos: o se produce un desgaste suficiente de la derecha que otorgue relevancia y posibilidades reales a su pujante contrario, o se acelera ese proceso, a través de una alianza de la izquierda, en minoría, con el centro u otras fuerzas, cuya única aspiración es reformar el capitalismo.

Esta última posición es indiscutiblemente la imagen que ha tratado de proyectar el Partido Socialista Chileno con la alianza que lo llevó a los últimos gobiernos, y el Frente por un País Solidario en Argentina, a través de la concertación que pactó con la Unión Cívica Radical entre 1999 y fines del año recién concluido.

Pero el detalle, al parecer no tenido siempre en cuenta, es que ambas formulaciones son sólo teóricas, hipotéticas, y que corren dos riesgos claros.

En el primer caso, porque por no buscar un compañero de ruta cuyos objetivos primarios al menos coincidan con los más inmediatos de las fuerzas revolucionarias, en decenas o más de años pueden no alcanzar el gobierno. Y en el segundo, porque el

vínculo en minoría a simpatizantes del sistema vigente, puede deteriorar la imagen auténticamente popular y transformadoramente propositiva de los movimientos declarados anticapitalistas y de las fuerzas antineoliberales en general.

La actuación de los socialistas en el gobierno de Chile y de líderes del FREPASO en el de Argentina en los últimos años, los revela a la palestra pública como fuerzas de izquierda que si no comparten teóricamente las políticas neoliberales, al menos en la práctica han sido partidarios de la preponderancia del libre mercado por sobre el papel del Estado.

Es cierto que resulta provechoso participar en los parlamentos, aunque sea en minoría, para contrarrestar decisiones antipopulares, pero cumplir una función similar dentro de los gobiernos es casi imposible y los riesgos negativos son más probables que los positivos.

En todo este proceso de "tácticas extremas", pesa enormemente la herencia legada de la ex URSS y la experiencia del socialismo de Europa Oriental que impusieron a las fuerzas progresistas una única táctica transformadora. Pero en él sobre todo incide lo que a nuestra consideración constituyen los mitos ideológicos imperialistas más trascendentales del siglo XX: el mercado "libre" como regulador principal del desarrollo económico, la esencia inmanentemente violenta de la revolución y la democracia liberal burguesa como expresión suprema de la democracia.

Lo más preocupante no es que la viabilidad y utilidad de estos tres principios ideológicos estén profundamente arraigados en la mentalidad de nuestros pueblos, sino que algunos de ellos son defendidos a ultranza hasta por fuerzas tradicionalmente denominadas de izquierda. (algunas incluso con opciones reales y potenciales de hacer gobierno). Por ello, en nuestra opinión, no se podrá ir "Por una nueva estrategia de la Izquierda..." (a lo que se pretende estimular con el título de este trabajo), sin una reflexión que contribuya modestamente a alejarse de los mitos que propiamente atentan contra ella.

El mito del mercado

de varias pequeñas organizaciones de izquierda. En las últimas elecciones de 2000 enseñó un notable retroceso.

El insuficiente desarrollo cultural y social de nuestro planeta ha creado las condiciones para que las acciones populares en general e históricamente, se muevan por las tendencias de los estados de opinión artificialmente creados. Así sean las convicciones forjadas en la gente por la vía oral o gráfica, así será su ánimo y disposición para apoyar una decisión, un acto o un programa político. Y este es uno de los postulados más conocidos, a cuyo dominio apuestan exitosamente los dueños reales del poder político en el globo terráqueo.

En este contexto, como señala el Dr. Heinz Dieterich: "El mercado es en la teoría económica burguesa, lo que es el pecado original para la teología católica: la primera gran mistificación, de la cual se derivan todas las demás. Como la Santa Trinidad en la Teología católica, el mercado es el principio supremo que rige el destino de todos: que premia a algunos individuos (como Bill Gates), a pueblos y naciones (como la del primer mundo) y destruye a otros...".⁶ América Latina es uno de los terrenos más fértiles en que ha germinado este principio.

Las reformas neoliberales promovidas en los últimos 20 años, se ejecutaron en varias etapas. Como concepción, comenzaron primero por la privatización de empresas estatales y la apertura de mercados para el comercio y la inversión extranjera, siguieron por la privatización de entidades tipo las universidades y actualmente se intenta la desregulación estatal en los sectores de la educación y la salud, las reformas al sistema judicial y la flexibilización de los mercados laborales.

A partir de 1973, en Chile se realizó el primer experimento neoliberal latinoamericano que a principios de los 80 desembocó en una gravísima crisis. Por ese entonces, la caída de los salarios y el crecimiento negativo, entre otros desastres económicos y sociales, obligó al gobierno de Pinochet a rectificar y a tomar medidas ajenas a la ortodoxia neoliberal. Sin embargo, fue en los inicios de la década de los 90 que comenzó el aquelarre privatizador y "flexibilizador" en nuestra región.

Al igual que Chile al principio, México, Brasil y Argentina, fundamentalmente, exhibían cifras macroeconómicas en aumento. Pero pasados los años y luego de la crisis asiática, iniciada en julio de 1997, aparecieron las señales negativas. La primera

⁶ "Identidad, economía y democracia en América Latina", en periódico *Trabajadores*, Cuba, 7 de febrero de 2000, p.6.

aconteció el 27 de agosto de ese año con la caída de los mercados bursátiles. A partir de 1998 el fenómeno arreció en Colombia, Ecuador, Brasil, México y Argentina.

Según el balance de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la región, difundido el 15 de diciembre de 1999, el desarrollo económico ese año fue pobre: "La crisis financiera internacional siguió siendo el factor dominante ... por segundo año consecutivo". Este organismo de la ONU atribuyó sus causas al brusco descenso de las entradas de capital y al alto volumen de pagos al exterior por intereses y dividendos, lo que ocasionó que la balanza de pagos resultara negativa en la región, por primera vez desde 1990. Los bajos precios de los productos básicos, con excepción del petróleo, y la caída del comercio interregional en América del Sur, redujo drásticamente los ingresos por exportaciones en muchos países.

De acuerdo a ese análisis, la situación global de la economía latinoamericana encubría importantes diferencias entre unos países y otros. Mientras México y la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe, se habían beneficiado de los estrictos vínculos que aún mantienen con la economía de los Estados Unidos y por ello mostraban crecimiento, los países del Cono Sur que se caracterizaban, como aún hoy, por concentrarse en la exportación de productos básicos y un importante comercio interregional de productos industriales, registraron un balance desfavorable.⁷

Aunque el Balance preliminar de la CEPAL para el año 2000 sugirió la recuperación económica de América Latina y el Caribe (excepto Uruguay y Argentina) con una expansión de la tasa media anual del 4 % y una menor inflación en comparación con años anteriores, no hay nada que indique un viso de desarrollo económico integral para la región. Según expertos, la recuperación se debió, en particular, al desempeño de las dos mayores economías (Brasil y México), y al auge de las exportaciones. Ella tuvo lugar como resultado del poco crecimiento de la demanda interna, motivada por la escasa subida de los salarios reales. Para la CEPAL la principal decepción del año fue el hecho de que las mayores tasas de crecimiento no se reflejaran en los mercados laborales donde el desempleo se mantuvo cerca del 9 %.⁸

⁷ *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe*, 1999.

⁸ *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe*, 2000.

Pero estas variables mencionadas que explican algunas tribulaciones de la privatización en nuestro continente, y en general de la supuesta libre competencia, que como se puede apreciar no es sólo compra y venta, sino préstamos, deudas y dependencias, no son sin embargo, las que auténticamente testifican acerca de la infundada creencia en el mercado "libre" como regulador principal del desarrollo económico. El elemento que en primer lugar definitivamente lo desacredita es su propia historia.

Tratamiento ideológico del mercado

El liberalismo predominó en los orígenes del capitalismo. Fue la ideología que defendió la no intervención estatal en la economía y se implementó sobre la creencia absoluta en las virtudes de la libre competencia y en el obstáculo que representaba el Estado para el desarrollo económico. Por eso, según esta doctrina, la presencia del Estado debía tener lugar solo en actividades relacionadas con la seguridad pública y al nivel de ella.

Esta concepción del papel preponderante del mercado en la economía pudo mantenerse durante el siglo XIX y principios del XX, con un escaso peso de la economía estatal en el total de la renta nacional, porque esa fue la etapa de establecimiento de las bases del modo de producción capitalista. Pero el paso del capitalismo de una fase liberal a otra de tipo monopolista provocó una sustancial modificación de la intervención del Estado en la economía y, en consecuencia, la ruina del liberalismo como doctrina económica coherente y operativa.

Este cambio, estuvo relacionado con la crisis de los años 30 y el desafío que representaba la creciente consolidación de la URSS que los economistas neoclásicos no podían explicar. El aumento del desempleo y la aparición del fascismo también crearon las condiciones para que los grandes partidos de la izquierda europea; socialdemócratas y comunistas; promovieran la necesidad de políticas económicas y sociales que asimismo beneficiaran la paz.

El representante teórico máximo de esta nueva tendencia fue el británico John M. Keynes que con su "Teoría general del empleo, el interés y el dinero" se convirtió en el

economista más influyente de su generación. Él propuso atacar las consecuencias de la crisis depresiva que explotó a partir de 1929 (vinculada a la disminución de la demanda), mediante la intervención del Estado en forma de gasto público, no cargado al presupuesto normal, que actuaría no como limitante, sino como complemento de la inversión privada. Esta nueva reforma del capitalismo, también conocida como Estado de Bienestar, estuvo vigente hasta mediados de los años 70 y promovió una continua expansión del Estado. Otros de sus rasgos más importantes fueron el manejo del déficit público como instrumento de política económica, la regulación del funcionamiento de los mercados, la práctica de políticas de redistribución de ingresos y el combate a la especulación financiera.

Sin embargo, esta "fórmula" para sacar a Europa de la crisis de la primera mitad del siglo XX, fue promovida no porque el capitalismo comenzara a tornarse benévolo o viera en el Estado su eterna salvación, ni siquiera debido a que no hubiera otras tentativas teóricas de solución, sino porque las condiciones ideales de expansión del capitalismo a partir de una economía destruida por la guerra y la competencia con el naciente mundo socialista, ni exigían, ni permitían entonces fórmulas más radicales y menos populares.

El neoliberalismo, como antecedente teórico del que se concibe hoy, aparece en la década del 40 de ese siglo en la llamada escuela de Friburgo que agrupó a economistas como Walter Eucken, Röpke y Ludwig Erhard. Este experimento doctrinal denominado "Economía Social de Mercado", que surgió en la República Federal Alemana, se opuso al intervencionismo estatal (especialmente en el terreno de la producción), al asociacionismo sindicalista y a la política de pleno empleo conseguida a través de la actuación económica de las instituciones públicas. Esta nueva fórmula, desde entonces, intentó ser una alternativa a los métodos y mentalidad planificadores surgidos después de la II Guerra Mundial, pero no se comenzó a considerar como política económica en Europa hasta los años 70. Sólo en Alemania tuvo sus primeras aplicaciones a inicios de la década de los 60, cuando dejó de surtir en ella los efectos del Plan Marshall.

Ese mismo plan, con cuyo nombre se conoce la ley de cooperación económica de los Estados Unidos, del 31 de abril de 1948, constituye otra evidente desacreditación del

mito del libre mercado como instrumento de regulación económica. Una lectura superficial de su mensaje puede indicar que mediante él, entre 1948 y 1952, sólo se pretendió repartir una ayuda de \$12000 millones de dólares a los países afectados por la guerra con el objetivo de acelerar la reconstrucción de Europa. Pero tal análisis sin dejar de tener un matiz cierto, encubre el temor estadounidense tanto a un descenso en el nivel de su producción nacional, como al caos internacional que generaría la insolvencia europea.

El Plan Marshall, que reforzó la importancia de la ayuda monetaria y material a las economías devastadas, así como la propia reconstrucción económica de Japón, demuestran que no hay economía de mercado que funcione, con tendencia al desarrollo, si ese proceso no es encabezado por un Estado sólido capaz de dirigir y controlar eficientemente la economía. Sin embargo, existen dos condiciones que crearon un clima favorable al renacimiento de la filosofía liberal del mercado y desfavorable al intervencionismo estatal. Ellas fueron el derrumbe del socialismo como modelo de acción, y el desprestigio de los paradigmas proclives a la ingeniería social en el mundo occidental, expresados en el llamado Estado de Bienestar.

Las vicisitudes ulteriores de los países socialistas europeos son conocidas. Su estancamiento económico y confrontaciones políticas coincidieron en los años 70 con la crisis del referido Estado Welfare o Benefactor Europeo que tuvo, con el “desarrollismo”, una manifestación pálida en varios países latinoamericanos. Como lo indica el famoso Reporte de la Comisión Trilateral, titulado “La Crisis de la Democracia” de 1975, la bonanza social y económica de que disfrutaban muchos países, entró en una crisis profunda y múltiple: fiscal, administrativa, política y cultural. Los “estados asistenciales” de entonces, perdieron sus capacidad social debido a déficits fiscales inmanejables, finanzas públicas desequilibradas y un aparato burocrático tan oneroso como ineficiente.⁹

La intención de crear, artificialmente, una voluntad política neoliberal en los distintos países, quedó marcada de forma muy clara cuando, ya desde la década de los 50, un grupo de políticos e intelectuales de varios países, encabezados por Walter Lippman y Friedrich Hayek, se dio a la tarea de reclutar a líderes políticos que instrumentasen un

⁹ “Visión crítica de la globalidad”, *Cuadernos de la globalidad*, CELAG, México, 1998, p. 280.

nuevo proyecto, cuyo objetivo central fuera ponerle fin a la intervención estatal en nombre del crecimiento económico.

Estos dos economistas con sus respectivos libros "Caminos de la Servidumbre" (1944) y "El mundo comunista y el nuestro" (1959), hicieron una gran "contribución" académica a la vulgarización de la correlación mercado-estado, a través de la profunda apología del capitalismo frente al socialismo. El conocido Grupo de Mont Pélérin por la creación de una escuela proneoliberal, organizado en los Alpes Suizos con la contribución de esos personajes, tuvo entre sus miembros más destacados en los años 60 a Raúl Salinas Lozano, padre del Presidente del mismo nombre que años más tarde implementara una política económica de capitalismo salvaje en México.¹⁰

Sin embargo, fueron Margaret Thatcher en Gran Bretaña y luego Ronald Reagan en los Estados Unidos los que abanderaron la gran retirada del Estado del campo de la economía. Ellos privatizaron casi todo lo que el Estado tenía e intentaron mostrar a sus empresarios como los agentes del desarrollo económico. Pero su mensaje neoliberal fue una farsa. Muchos ejemplos desmienten ese estandarte. En el occidente desarrollado, las nuevas políticas neoliberales nunca se ejercieron, ni aún hoy, con la despiadada agresividad e intensidad con que se ha promovido digamos en América Latina, mucho menos en los estados más desarrollados del momento.

Es conocido que la escuela moderna de pensamiento proteccionista nació en los Estados Unidos, y que Gran Bretaña se lanzó más abiertamente al libre mercado luego de las ventajas que le otorgó un proteccionismo de 150 años. Como ha explicado sabiamente Noam Chomsky en su libro "*Rollback I, II, III*": "si hubiera dependido de las fuerzas del mercado (...) hoy en día en los Estados Unidos no habría industria de acero, ni de automóvil, ni mucho menos de sistemas informáticos y productos electrónicos en general. Los partidarios de Reagan se limitaron a cerrar el mercado a la competencia japonesa mientras vertían en él fondos públicos".¹¹

¹⁰ Noam Chomsky, *Educación, mercado y democracia*. "La Sociedad Global", Casa Editora Abril, Cuba, 1997, pp. 9-12.

¹¹ *¿Cómo se reparte la torta? Políticas USA al final del milenio*. Colección Más Madera, Editorial Icaria, Barcelona, 1996, pp. 34-35.

Uno de los hechos más recientes y que más relevantemente pudieran cuestionar la reverencia al supuesto mercado libre es la aplicación de la ley antimonopolio a la empresa Microsoft que encabeza todos los programas informáticos en el mundo. Pero si bien es cierto que la llamada "Economía Social de Mercado", en sus orígenes, incitaba teóricamente a eliminar los grandes conglomerados económicos porque podrían ir en detrimento del equilibrio de la "libre" competencia, lo que está verdaderamente probado son dos cosas.

Primero, que con el cambio de la composición técnica del capital de entonces, lo que se desconcentró fue la producción, no así la propiedad. Y segundo, que en el conocido Consenso de Washington, donde se expresan las ideas que debían presidir las pláticas sobre la proyección de la economía global, no hay una sola palabra que indique a las economías nacionales subdesarrolladas prohibir la concentración de la propiedad en pocas manos, y esto denota una clara intención de proteccionismo monopolístico nacional y transnacional.

Aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos haya sancionado definitivamente al consorcio de Bill Gates a dividirse en dos y prohibido que existan personas con acciones en ambas partes, la realidad económica internacional parece demostrar que la ventaja actual del magnate de las computadoras para "competir", no está en su monopolio sobre ellas, sino especialmente en su habilidad para especular con las finanzas.

De otro lado se puede recordar otras muchas ocasiones en que la creación de monopolios gigantescos no provocaron sanciones como la que hemos mencionado, incluso muchos casos ni siquiera llegaron a los tribunales. La fusión de McDonnell con la Boeing fue un ejemplo de esa "flexibilidad" del gobierno norteamericano. Pero entonces no había gran competencia nacional porque entre esas dos empresas se dividía el mercado de fabricación de grandes aviones. El peligro estaba en la competencia europea, y la creación del descomunal monopolio era una acción muy propicia para ponderar la economía norteamericana.

Una de las últimas expresiones de negación práctica de la Ley antimonopolio por parte del gobierno norteamericano fue su protesta, en julio de 2001, ante el veto de la Unión Europea a un intento de fusión de las transnacionales General Electric y Honeywell que

daría a los Estados Unidos supremacía mundial en la fabricación de turbinas para aviones.

Este segundo hecho también demuestra que al parecer, en el caso particular de Microsoft, había fuerzas muy poderosas que querían jugarle una mala pasada. Pero ese es un hecho aislado. Nada, a no ser un planteamiento antisistema, puede atentar contra la tendencia normal del capitalismo a la concentración y centralización del capital. Aquí también se cumple el viejo proverbio de "quien paga, manda".

La estrategia de los poderosos consorcios norteamericanos de ocultar el papel de los grandes subsidios estatales y el intervencionismo del Estado para aparentar la eficiencia del comercio, los ha llevado a continuar profundizando en crear una voluntad artificial en la opinión pública mundial y en los respectivos gobiernos nacionales, que permita nuevamente ver en el libre juego de la oferta y la demanda, la vía fundamental para alcanzar el desarrollo económico. Tal es el objetivo del mencionado Consenso de Washington y del llamado "pensamiento único".¹²

Esta "voluntad", aparentemente no impositiva, asimismo oculta las ventajas económicas del centro sobre la periferia. Ella también quedó cuestionada a partir de hacerse público el hecho de que en el año 1981 (un día después del triunfo electoral de Ronald Reagan), el director de la fundación Heritage, Edwin J. Feulner, entregara a la Casa Blanca un documento titulado "Mandato para dirigir" (Mandate for Leadership).¹³ Sus autores insistían en que los Estados Unidos utilizaran su "ayuda" y poder en la política externa, para obligar a otros países a la privatización masiva de sus empresas públicas, lo que de hecho se convirtió en la política oficial del gobierno norteamericano y de las instituciones supranacionales respectivas: El FMI, el Banco Mundial y otras. A partir de este principio y hasta hoy, a los gobiernos de los países subdesarrollados, sólo les cabe la "libertad" de aceptar qué empresas y servicios privatizar, qué recortes hacer a los gastos sociales y qué tipo de flexibilización laboral aplicar.

¹² Bajo esa denominación se conoce la "revolución" tatcheriana y reaganiana que se basa en una vuelta más sofisticada al liberalismo de los economistas clásicos en el siglo XVIII. El politólogo francés Ignacio Ramonet definió cuatro características del "pensamiento único": planetario, permanente, inmediato e inmaterial (Ver: *Las certidumbres de la crisis mundial*, Primer Encuentro Nacional por un pensamiento único, Instituto de Estudios y Formación, CTA, 1999).

¹³ Heinz Dieterich, *Globalización, educación y democracia en América Latina*. "La Sociedad Global", Casa Editora Abril, Cuba, 1997, p.69.

Con la interpretación de esta realidad expuesta arriba, resulta ingenuo considerar al "libre" mercado, y dentro de él al neoliberalismo, como el instrumento capaz de garantizar el bienestar de los pueblos del llamado Tercer Mundo. Es cierto que ese mecanismo contribuye al crecimiento de algunos sectores económicos, pero este se alcanza solo en detrimento del éxito económico de otros que también podrían beneficiar temporalmente a algún sector social. Además ha quedado demostrado que el crecimiento de la economía en los distintos países de Latinoamérica se hace cada vez más a expensas de la colocación de capitales en la esfera de las finanzas (que es donde mayor es ganancias se obtienen), y no en la producción material donde originalmente tuvo su éxito.

A pesar que hay fuerzas de izquierda que han soñado y siguen soñando con una distribución más justa de la riqueza dentro del actual orden económico, la práctica de las últimas décadas bajo el neoliberalismo, ha inclinado la balanza hacia una distribución todavía más injusta de ella. Y esto es una derivación lógica que antes de Marx fue definido por los propios economistas burgueses como intereses de clases. Es lo que hace incompatible el "libre" mercado con las más apremiantes necesidades populares. Por eso, las teorías económicas modernas excluyen las relaciones sociales y políticas del concepto de desarrollo y lo definen en términos de producto interno bruto per cápita.

Esas teorías, en su variante neoliberal actual, tienen dos claras fuentes de inspiración fundamentales. La primera es la que representa el filósofo inglés Jeremy Bentham, cuya concepción del hombre como *homo hominis lupus* ("el hombre es el lobo del hombre") y de la sociedad como *bellum omnium contra omnes* ("guerra de todos contra todos") encuentra su expresión utilitarista-mercantil en su obra "*Escritos Económicos*". Para el "filósofo de la utilidad", en el curso general de la existencia: "...en todo corazón humano, el interés de la propia consideración predomina sobre todos los demás en conjunto (...) únicamente por un sentido de interés, por la eventual expectativa de placer o dolor, es como puede ser influida la conducta humana en cualquier caso".¹⁴

El legado del cura-economista Robert Malthus es el otro precedente inspirador. En su *Plan propuesto para la supresión gradual de las leyes de beneficencia*, Malthus

¹⁴ J. Bentham, Obra citada, FCE, México, 1978, p.3.

demanda que la sociedad se libere de "la tiranía, la dependencia, la indolencia y la infelicidad" que engendra la beneficencia pública y le parece que "la justicia y el honor nos obligan a rechazar de la manera más formal todo derecho de los pobres a que se les sostenga".¹⁵

El hecho de que de un lado existan fuerzas, opuestas a las tradiciones de derecha, que hoy ocupan posiciones de gobierno y comparten (o lo han hecho) políticas de ajuste fondomonetaristas, y que de otro haya agrupaciones del mismo signo referencial que excluyen, explícitamente de sus programas futuros, transformaciones económicas socialistas en una segunda etapa, indica que la creencia en el "libre" mercado como regulador del desarrollo económico continúa vigente dentro de las filas de la Izquierda, y que sigue comportándose como uno de sus mitos centrales lo que la aleja del encuentro de un proyecto estratégico alternativo no ya anticapitalista, sino hasta antineoliberal.

Este debate, que se expresa actualmente dentro de esa parte de la izquierda en el dilema Estado-Mercado, en el mejor de los casos, no rebasa la discusión de en qué por ciento debe preponderar el primero sobre el segundo, y lamentablemente excluye de sus programas lo más importante: cambios político- institucionales profundos que le garanticen un mínimo de condiciones para la ejecución de transformaciones de amplio beneficio popular.

Además de ese mito acerca del mercado, existe un segundo sustento trascendental para la actual dispersión teórico-práctica del término Izquierda. Es aquel que ve en la revolución un concepto que sólo entraña violencia.

Dos elementos de la cara "violenta" de la revolución

En 1993, el autor Gabriel Vargas Lozano publicó un artículo titulado: "¿Es aún posible el socialismo?",¹⁶ que a todas luces es representativo de una interpretación, muy difundida y todavía vigente, sobre la huella heredada del "socialismo real". Caracterizando la sociedad soviética él señaló, entre otros rasgos importantes, dos que

¹⁵ T.R. Malthus, *Ensayo sobre el principio de la población*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 476.

¹⁶ revista *Dialéctica*, México, No. 23-24, Invierno / 1992 - primavera / 1993.

son reflejos concretos del mito sobre la esencia inmanentemente violenta de la revolución.

El primero, lo vincula a la supresión de la propiedad privada sobre los medios de producción y su estatización, y el segundo, a la institucionalización del unipartidismo que se fusionó con el aparato del Estado. Sin embargo, si bien estas características son precisas y, como principios, han significado obstáculos a los esfuerzos de las fuerzas revolucionarias latinoamericanas para armar con absoluta libertad sus estrategias de acumulación política, también es justo reconocer que una cosa es lo que resultó en esos países y otra lo que previó teórica y políticamente Lenin, y lo que se ejecutó con su anuencia personal.

El mito de la revolución se remonta por lo menos a los días esplendorosos de la Revolución Francesa, que fue virtualmente ensayada como pesadilla por todos los grandes novelistas burgueses del siglo XIX. Desde el poeta y novelista italiano Alessandro Manzoni que en su novela "*Los novios*" trató de conciliar el evangelio con la revolución, hasta Emile Zola, Charles Dickens, el estadounidense Theodore Dreiser y otros célebres escritores, la mayoría de las obras publicadas rezaban el terror que implicaba violentar el orden social pacífico, aunque fuera en aras de promover algún nuevo mejor cambio social.

Este mismo concepto de revolución, que históricamente ha vinculado al proyecto socialista con la supuesta pérdida inmediata de todo tipo de propiedad no estatal, y se ha difundido, desde sus orígenes, con el sinónimo de hacer correr la sangre, ha sido el legado ideológico, hasta nuestros días, que más terriblemente atenta contra la búsqueda de una nueva alternativa al capitalismo actual. Su interpretación, incluso dentro de las filas de muchos movimientos revolucionarios, soslaya una posible vía no armada de hacerla.

Esa limitación se acrecienta, cuando hay fuerzas dentro de la propia izquierda latinoamericana que defienden una salida militar a sus respectivos conflictos, a pesar de que incluso están dispuestas al diálogo. Pero el rechazo tradicional a este concepto es más peligroso aún, en tanto parte importante de sus detractores son las propias masas populares que hoy debieran ser no sólo su protagonista, sino su primer beneficiario.

La realización de la propia revolución rusa en octubre de 1917 fue manejada con la máxima agudeza y odio como una confirmación de la validez de ese enfoque. Pero existen dos elementos vinculados a ella (comúnmente aceptados por la politología burguesa y muy difundidos por manuales de la “era soviética”, posterior a la muerte de Lenin) que constituyen la otra cara de la cacareada esencia violenta de ese concepto: el supuesto rechazo de toda revolución política socialista a una amplia alianza social y de clases que incluya a otros sectores no proletarios y campesinos, y la exclusión de toda forma de transición a un nuevo régimen social que suponga, económicamente, la utilización de la burguesía como factor productivo importante.

En un intento por esclarecer estas dos últimas creencias, comenzaremos el análisis por el abordaje de la supuesta necesaria violencia económica socialista contra la burguesía.

Es posible demostrar sin grandes dificultades, que la concepción inicial de Lenin (en la antesala de la Revolución de Octubre) sobre la construcción del socialismo, y las medidas que tomó el Estado soviético al principio, no estuvieron relacionadas, en sentido alguno, con una comprensión previa de la realización de confiscaciones y grandes nacionalizaciones socialistas de forma inmediata.

Días antes y después de la consumación de la revolución, Lenin explicaba¹⁷ que la tarea del momento no era la expropiación forzosa de la propiedad capitalista, sino establecer el control obrero y omnímodo sobre ella. Para él la clave consistía en que los obreros aprendieran y obligaran a los capitalistas a comerciar con el estado proletario y a rendirle cuenta de lo que hacían. Es cierto que por esa época se habían producido en el país grandes nacionalizaciones y confiscaciones de carácter socialista, algunas motivadas por el desmedido entusiasmo popular y otras como respuesta a los sabotajes a los capitalistas, pero también es verdad que el propio líder bolchevique fue combatido por mencheviques y “comunistas de izquierda”, precisamente por concebir la parte más importante de la nueva estrategia de nacionalizaciones como medidas para ser ejecutadas bajo formas de capitalismo de estado, casi a la manera en que eran ejecutadas por los mismos estados capitalistas más avanzados del momento. La

¹⁷ V.I. Lenin, “¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?”, Obras Escogidas en 3 t., T.2, p. 425, Ver también, “Las tareas inmediatas del poder soviético”, Obras Completas, t. 36, p. 190.

dirección de las empresas y fábricas nacionalizadas o confiscadas en la novedosa concepción leninista, eran entregadas a los capitalistas por el poder soviético no como capitalistas, sino como técnicos, especialistas u organizadores, a los que se asignaba una alta remuneración por su trabajo.¹⁸

Una política económica de este tipo que supusiera la utilización de los conocimientos y experiencia de la burguesía en el proceso productivo, para ser consecuente con una verdadera voluntad de alianzas no estratégica, no podía excluir del gobierno a la parte más colaborativa de los propios sectores burgueses. Esta táctica se establecía no para que ellos orientaran políticamente el país (camino, cuyo carácter socialista ya estaba determinado por la hegemonía obrero-campesina en la revolución), pero sí para que técnicamente contribuyeran a desarrollarlo y consiguientemente otorgaran al proceso un marco de tranquilidad social durante la etapa inicial de transición al socialismo. Esto explica que el 7 de noviembre de 1917, día en que se proclamó el carácter socialista de la revolución rusa, en horas de la noche, durante el II Congreso de los Soviets y Diputados Obreros y Soldados, se reunieran 390 bolcheviques y unos 246 representantes de los eseristas y mencheviques, para formar gobierno.

El hecho de que los mencheviques y la tendencia derechista de los "socialistas revolucionarios" (entre cuyos miembros se encontraban importantes propietarios), abandonaran la sala, y quedaran excluidos del primer gobierno revolucionario provisional ruso de fines de ese año, no indica que Lenin, como principio, institucionalizara el unipartidismo en él, sino que la superioridad numérica y moral de los bolcheviques en ese Congreso era inobjetable.

Siendo los acontecimientos así y no de otra forma, resulta completamente erróneo diluir los primeros años de la Revolución Rusa, liderada por Lenin, en una supuesta historia de la URSS, que fue contada por teóricos burgueses y de izquierda según la imagen violenta que los primeros querían brindar al mundo de ella, y a partir de la concepción teórica con que los segundos pensaban se podrían arribar al socialismo. De esa manera, todo rechazo que la izquierda haga al concepto de revolución, por supuestamente estar reñida con una muy amplia alianza social y de clases, o por

¹⁸ V.I. Lenin, *Acerca del Infantilismo "izquierdista" y del espíritu pequeño burgués*, Obras Completas, Ibidem, p. 319.

excluir de su proyecto económico la utilización de sectores del empresariado nacional e incluso extranjero, carece de fundamento histórico y objetivo, al menos en el caso ruso que ha sido el mayor supuesto responsable.

Los proyectos iniciales de la Revolución Cubana, que después de más de dos años de comenzada, se precipitaron a un curso político y económico declaradamente socialista, tampoco tuvieron que ver con una concepción, a priori, que estableciera un programa de transformaciones sociales sobre la base de las grandes nacionalizaciones, expropiaciones o confiscaciones, de carácter socialista.

La radicalización ulterior del proceso que no siempre se explica como la respuesta a la reacción interna y sobre todo, al gobierno norteamericano, no es suficiente ni histórica ni objetivamente para asociarle a la revolución el mito de la esencia inmanentemente violenta de ese concepto. Las cinco leyes que proponía el programa revolucionario del Moncada y las palabras de Fidel Castro en cuanto a que las únicas transnacionales que se tenía previsto nacionalizar, eran los truts eléctrico y el telefónico (precisamente por burlar el pago de sus deberes al fisco y por estar cobrando ilegalmente tarifas excesivas al pueblo),¹⁹ no salían de los marcos de una revolución democrático-burguesa.

Estos ejemplos, junto al propio apoyo del Ejército Rebelde en la conformación el 5 de enero de 1959 de un primer gobierno de constitución esencialmente burguesa, desmienten todo antecedente que vincule a Cuba con la violencia por la violencia. La supuesta prescripción de nuestra revolución que asegura el rechazo en bloque de las fuerzas revolucionarias a todos los sectores empresariales nacionales y extranjeros, como compañeros en la fórmula de abandonar el subdesarrollo y la dependencia, carece de fundamento.

Ahora bien, ¿qué otro elemento explica en nuestro continente, desde el punto de vista histórico, que los movimientos de izquierda no lograran acceder, con mayor frecuencia y estabilidad, a los gobiernos nacionales y locales, y aún de manera casi absoluta, no hayan podido asumir el poder político?

¹⁹ Fidel Castro Ruz, *La Historia me absolverá*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 71-75.

Del mito democrático al hecho real

En nuestra opinión la respuesta originaria a esa pregunta hay que buscarla en la influencia del mito de la democracia liberal burguesa en nuestros contornos; en que las formas republicanas de gobierno y la clásica división moderna de poderes fueron importadas por los países latinoamericanos, cuando nuestras características e historia eran diferentes al mundo europeo y cuando aún las propias estructuras de la sociedad burguesa por ese entonces ni siquiera estaban constituidas.

Los sistemas democráticos liberales, a "lo europeo", fueron aplicados en Latinoamérica por incidencia externa. En esta etapa los nexos entre el Estado y la nación se distinguían por la hegemonía del sector más dinámico de la clase terrateniente aburguesada que fue en parte cautivado y en parte presionado por el imperialismo, a seguir siendo un instrumento aportador de materia prima. Esa fue la misma razón por la que nuestros países continuaron adentrándose en la conformación de una estructura económica deformada y dependiente del exterior, ahora con la particularidad, de que ese proceso se producía dentro de los marcos de un también importado y naciente modo de producción capitalista.

Esta situación de inexistencia de condiciones materiales más maduras y la adopción de formas de vida a destiempo, subordinadas a un agente externo, presentó, y continúa presentando hoy, un considerable retraso subjetivo. Esto se puede apreciar, en parte porque desde los años 20 muchas de las organizaciones políticas más estrechamente vinculadas a la clase obrera latinoamericana habían subordinado sus tareas programáticas a las decisiones de la III Internacional Comunista y las imposiciones del PCUS, pero sobre todo porque, durante los últimos 10 años, una notable cantidad de partidos políticos autodenominados de izquierda, bajo la influencia del derrumbe del socialismo, han aceptado, sin cuestionamientos, la conceptualización de la democracia planteada por la teoría política liberal de los Estados Unidos y Europa.²⁰

²⁰ Ella se ha difundido en la literatura, a través de las personalidades de Schumpeter y Dahl y a partir de los trabajos de Kelsen y Norberto Bobbio, respectivamente, entre otros.

Desde hace apenas cinco años, a nivel de Cumbres Iberoamericanas, se han desarrollado dos eventos que tienen relación directa con este tópico. El primero se celebró en Viña del Mar, Chile, en 1996 y el segundo en la Isla Margarita, Venezuela un año después. En cada ocasión, VI y VII Cumbres, se discutieron como tema central respectivamente, la "gobernabilidad" y "los valores éticos de la democracia".

Mientras la gobernabilidad fue valorada en su dimensión socio-política y económica, así como en su vínculo con aspectos tan importantes como la reforma de la administración pública, la descentralización del Estado, y el fortalecimiento de las instituciones políticas, (aspectos todos relacionados a lo que llamaron el logro de una "democracia eficiente y participativa" que como en otros temas de beneficio popular han tenido un discurso puramente formal), la reflexión en torno al "valor ético de la democracia" estaba vinculada a la preocupación continental por la vigencia del clientelismo, el caudillismo, la compra de votos, el fraude electoral, la corrupción, el peculado y el favoritismo, entre otros males.

Esta percepción de crisis no sólo económico-social, sino también política en América Latina es asimismo aceptada por instancias económicas internacionales. En el Informe anual sobre el progreso económico y social latinoamericano, presentado el 7 de mayo del 2000 por el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo se admite que el panorama en América Latina se caracteriza, con pocas excepciones, por la apatía respecto de la democracia, los bajos niveles de interés político, el bloqueo entre los poderes legislativo y ejecutivo, y un sistema judicial y partidos políticos notablemente débiles, y desde ese análisis hasta ahora, la situación poco ha cambiado.

En un lenguaje más concreto y obviamente más agudo, estos males se pudieran explicar, entre otros, por la exclusión de las minorías nacionales (sobre todo indígenas) y sus respectivas culturas de los procesos políticos, la ausencia de revocación de mandatos hasta la siguiente contienda electoral y las desenfrenadas campañas electorales millonarias para el respaldo de candidatos a distintos niveles judiciales y de gobierno. Un rasgo típico de esa situación, que a su vez condiciona el apoyo popular a esos sistemas de gobierno, es que el monopolio de la información (todavía en manos de los verdaderos detentadores del estado burgués), ha modelado exitosamente la

manera de pensar de nuestros pueblos, y conseguido aplazar el cuestionamiento integral a la estructura política y al funcionamiento del sistema.

Entre las características de las sociedades latinoamericanas, un lugar importante lo ocupan la existencia de constituciones, que haciendo énfasis legislativo esencial en los deberes de los ciudadanos y en el derecho a la propiedad privada y a las libertades civiles y políticas (que cada vez son más reducidas y de enrevesada comprensión), asimismo limitan al pueblo, desde el punto de vista legal, de sus derechos a la salud, la educación o a un retiro decoroso.

Casi todas las experiencias de izquierda de los últimos años en América Latina, raramente se han apartado del principio de concebir la democracia y concretamente, su cara de primera instancia; las elecciones; como el eslabón imprescindible para que cada partido revolucionario llegue al gobierno. Aunque en realidad hoy sigue siendo una forma de lucha, su debilidad está en que muchas de esas fuerzas han asumido la concepción liberal de la importancia psicológica de conservar "mi partido" en detrimento de alcanzar la unidad contra el opuesto político común: la derecha interna y las transnacionales. La mayoría de esas fuerzas no ha concientizado que el sistema electoral a base de partidos políticos, con todos sus mecanismos legales e ilegales de desplazamiento de unos por otros con que ha sido estructurado hasta hoy, no beneficia en lo absoluto a los sectores que dentro de la propia izquierda actúan de manera independiente, mucho menos cuando ese sistema está condicionado para que la victoria generalmente esté en manos de la fuerza, la alianza o la clase que en última instancia detenta el verdadero poder del Estado.

La no comprensión de este fundamento, que, de manera muy común, ve en la llamada sociedad civil la expresión práctica inmediata y definitiva de oposición a los actuales males generados por los estados capitalistas, ignora que son los dueños del poder los que están en mejores condiciones materiales de promover sus propias representaciones dentro de la sociedad civil. Y si bien hay movimientos y organizaciones no gubernamentales que representan a sectores opuestos a los gobiernos tradicionales de la derecha, ninguno, por separado, tiene más recursos materiales que el poder de facto para legitimar, a nivel ideológico y cultural desde abajo, la hegemonía que a través del estado, este último también impone, desde arriba.

Esta es otra condición más para entender que la consigna de sociedad civil, enarbolada dentro del existente marco democrático latinoamericano, solo surtirá su efecto popular transformador, si sirve a las fuerzas de oposición a los gobiernos conservadores, para transitar, de la lucha sectorial aislada que llevan en cada país, hacia la articulación de un proyecto político conjunto que contribuya a satisfacer las aspiraciones de todos los excluidos. Una posición contraria a esto, solo servirá únicamente para legitimar el sistema democrático liberal como expresión “suprema” de democracia, donde, en apariencia, siempre habrá cabida para todos.

Para derrotar a las fuerzas de derecha de forma duradera (y no solo para llegar al gobierno), es necesario alcanzar la más amplia alianza popular. Esta se debe lograr sin quebrar los perfiles específicos, en el caso que realmente haya diferencias, pero rompiendo la estrecha concepción de "mi partido político" o "mi organización no gubernamental" y aglutinando en una sola gran coalición a la mayor parte de la población marginada del poder estatal actual. Esta sin embargo, no es una deducción a la que fácilmente se puede llegar porque ha habido muchos años de adoctrinamiento en sentido contrario.

Algunos debates históricos acerca de “la democracia”

Poco después de la II Guerra Mundial, por ejemplo, tuvo lugar un debate para definir la democracia por la fuente o los objetivos, o por los procedimientos al modo de Schumpeter. Para el economista austríaco la democracia era un simple método y, como cualquier otro, "no puede ser un fin en sí mismo".²¹ Por eso en su concepción ella no tenía ningún significado ético-normativo y apenas era un modelo o método de organización de la decisión colectiva, cuyo eje lo constituía la competencia entre los partidos políticos. Esta fórmula cerró el debate en 1970²² y es la que se ha impuesto hasta hoy a partir de las primeras discusiones en torno a ella.

Tal opinión de Schumpeter, que posiblemente sea lo más representativo de la teoría y práctica política actual en torno al concepto de democracia, está muy distante de las

²¹ J. A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York, Harper and Row, 1942, p.242.

²² Samuel Huntington, *La tercera ola. La democratización a fines del siglo XX*, Piados, 1994, p.20.

formulaciones originales. Por eso, entre las recomendaciones más "sólidas" que brinda este autor para profundizar en el perfeccionamiento de la democracia liberal burguesa, está el abandono de lo que él llama la "teoría clásica" de la democracia, representada por Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Rousseau, Tocqueville y Marx . Pero ¿por qué? porque cada uno de estos pensadores aportó algo racional que iba en contra de su "gran" teoría.

Aristóteles por ejemplo, quien fue considerado el primer teórico del Estado de Derecho, en contra del terreno de desigualdades sociales, en su obra *La política* aseguró como mejor comunidad política, aquella que fuera administrada por la clase media, donde sus miembros tuvieran un patrimonio moderado y suficiente, "ya que donde unos poseen en demasía y otros nada, vendrá o la democracia extrema o la oligarquía pura (...) o como reacción contra ambos excesos, la tiranía".²³

El filósofo de la Ilustración J.J. Rousseau de otro lado, vinculado directamente a los intentos de superación del régimen feudal, brillantemente sentó las bases de la destrucción del mito de la democracia liberal cuando en su teoría sobre *El contrato social* desmistificó la propiedad privada como derecho natural y al régimen político que se erige sobre su base, como el más idóneo en la naturaleza humana. Además descubrió el secreto por el que los ricos se aferraron al Estado como garante de sus riquezas:

"Careciendo de razones válidas para justificarse y de fuerzas suficientes para defenderse (...) el rico, constreñido por la necesidad, concibió al fin el proyecto más arduo que haya jamás realizado el espíritu humano; el de emplear a su favor las mismas fuerzas de los que lo atacaban, de hacer de sus adversarios, sus defensores, de inspirarles otras máximas y de darles otras instituciones que le fuesen tan favorables a él como contrario le era el derecho natural".²⁴

Esta máxima, expuesta hace dos siglos, es la clave de la conservación del poder burgués de hoy, que bajo la maleza ideológica se mantiene escondida, pero opulenta.

²³ Aristóteles, *Ética Nicomaquea*. Política, Edición Porrúa, México, 1994, p.232.

²⁴ Juan Jacobo Rousseau, "Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres", Obras Escogidas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1973, pp. 562-563.

Como ha enseñado la historia, al poder se ha accedido por medio de la fuerza, de la herencia de reyes a hijos, de la cooptación que convierte en gobernante a aquel que un antecesor en el puesto ha designado, y del sorteo que deja en manos de los dioses la designación. Estas recetas sin embargo, representativas a veces de fuerzas ocultas, tuvieron una cara más mejorada cuando se estableció la elección de los gobernantes por los gobernados a partir de las primeras experiencias democráticas en la Roma y Grecia antiguas.

El concepto de democracia (que en el sentido clásico se basa en la comprensión de que la razón no es solo aplicable al entendimiento y dominio de la naturaleza, sino también a la organización de la vida social y política), como la propia categoría de mercado, asimismo ha discurrido por varias etapas que condicionaron la necesidad de sus distintas manifestaciones histórico-concretas. En su evolución, un lugar importante lo ocupa la elaboración del concepto moderno de elecciones políticas que tuvo su momento decisivo en el último tercio del siglo XVIII con el triunfo en Europa de la revolución francesa y el nacimiento de los Estados Unidos.

Aunque la idea de la representación se impuso en esa época con la transformación de los otrora llamados súbditos en los ahora nuevos "ciudadanos", en la primera fase post-revolucionaria electoral participaron únicamente los ciudadanos que acreditaban poseer una determinada cantidad de bienes materiales o conocimientos específicos. A lo largo del siglo XIX el cuerpo de electores se amplió, pero fue en el siglo XX, cuando se admitió el voto de las mujeres, que el sufragio universal se convirtió en una conquista.

Es conocido que en todo este largo proceso político el hombre necesitó el refuerzo que le proporcionaba el grupo para promover sus propios intereses. Ellos han sido de tipo sectoriales, religiosos, económicos, culturales o profesionales, entre otros, pero también de naturaleza política con el objetivo de conquistar gobiernos, y por eso aparecen los partidos políticos que fueron transformando sus contenidos hasta como se perciben hoy.

El fenómeno partidista se encuentra tanto en el Mundo Antiguo como en el Renacimiento, pero tal y como se concibe en la contemporaneidad, su aparición coincidió con el surgimiento del régimen burgués parlamentario y el desarrollo de los procedimientos electorales. Si bien el Estado liberal surgido de las revoluciones

americana y francesa ignoró los partidos, en esta última los jacobinos y girondinos constituyeron el embrión de las futuras organizaciones políticas.

Se habla de la competencia entre partidos políticos, son los casos de cuando como N. Bobbio o Schumpeter, en el sentido de elemento mínimo de un estado democrático, se soslayan muchas cosas. La más importante de ellas es que la aparición de esas instituciones estuvo condicionada histórico-concretamente y por tanto el surgimiento de nuevas condiciones debe implicar, sino una variación también de su estructura y funcionamiento, al menos un reanálisis por parte de los sujetos a quienes esa formulación hoy no conviene.

En este sentido es importante recordar tres cosas. Primero, que en sus orígenes, los partidos políticos fueron legalizadas solo cuando la oposición al gobierno burgués (por parte del régimen feudal) dejó de ser considerada un peligro para la seguridad del Estado, y se le estimó indispensable para la organización política del Estado. En segundo lugar, a diferencia del momento en que la clase capitalista impuso su sistema de gobierno, cuando ya era dominante económicamente, los trabajadores no podrán ser hegemónicos en la economía, sin imponer políticamente el suyo y en tercer lugar que la politología liberal burguesa jamás reconocerá otra forma de acceder al gobierno que no sea la que le permita conservar su hegemonía en él, y por eso su base en la actualidad continúa siendo el sistema de partidos políticos.

Pero, qué es lo que realmente acontece hoy, y desde hace decenas de años, en relación con los partidos políticos a nivel mundial y latinoamericanos? Que la supuesta libre competencia entre ellos, para asumir los respectivos gobiernos, se torna o una aguda lucha entre las organizaciones principales en que los sectores más ricos se agrupan, o una periódica renovación de presidentes y parlamentos, representativos de un solo partido en apariencia popular, pero en esencia profundamente excluyente. Y esta es una evolución del sistema democrático liberal completamente lógica que se expresa políticamente como la propia tendencia del capitalismo a concentrar y centralizar el capital, concentrando y centralizando el poder político.

Mientras hace unos años se criticaba a los socialistas porque no querían apartarse de las "regularidades generales de la construcción del socialismo" (razón importante que contribuyó a su fracaso), debemos reconocer que los capitalistas son verdaderamente

razonables al considerar que su éxito político está en que ellos no pueden separarse de los principios de la democracia liberal burguesa.

Cuando en los siglos XVIII y XIX la burguesía estaba en ascenso y apenas tenía preponderancia económica y mercantil, ella era revolucionaria y por eso pretendía el poder del Estado para abatir los privilegios nobiliarios. Por esa época invocó la filosofía de los derechos naturales, propugnó un Estado que ofreciera el máximo de garantías para la libertad y la propiedad, compró títulos, hipotecó a los nobles, debilitó el poder del clero, y finalmente, cuando la nobleza constituyó un obstáculo para sus planes, la eliminó políticamente. Pero la clase capitalista ya pasó esa etapa. Hace años se ha convertido en una fuerza conservadora y es quien mantiene ahora limitada políticamente a los portadores de la nueva formación social; es decir los sectores populares, marginados y pobres de nuestras sociedades. De allá hacia acá, todas sus acciones han estado abocadas a conservar las conquistas logradas lo que en un lenguaje cuidadosamente preciso se ha dado en llamar poder político.

Un éxito notable a favor de los apologetas del liberalismo político es que bajo esa consigna, y su consiguiente "libertad" de asociación, partidos de izquierda con similares objetivos, programas de lucha e igual composición social, conservan sus fronteras aisladas entre sí, por considerarse dueños de una verdad y propósitos que suponen les son exclusivos. La práctica de ese sectarismo, también presente en América Latina, ha puesto en riesgo hasta hoy, las más amplias alianzas para intentar al menos conquistar el gobierno.

Es cierto que las formas de gobierno han cambiado, pero no el dominio mismo. Aunque ahora ya no siempre es imprescindible la ocupación física de un territorio, sino el control monopólico capitalista financiero transnacional de los mercados y las tecnologías de punta para ejercer la supervisión global (en particular sobre todos los pueblos atrasados), todavía existen formas parciales de poder, no completamente transnacionalizadas, que contribuyen a conservar la división del mundo en estados nacionales y a garantizar el dominio de los sectores pudientes dentro de las fronteras de cada estado.

En ese mismo sentido la izquierda debe entender que uno de los instrumentos esenciales de ese poder a nivel local-nacional en las sociedades modernas, es el

Derecho, y que gran parte de la actividad de sometimiento de unos por otros se realiza a través de él.

Un estudio profundo de muchos programas políticos de las fuerzas de izquierda indica que, aunque reconocen que el Derecho establecido por cada estado fija las reglas de conducta obligatorias para sus individuos (en forma de Constituciones, códigos y leyes), en su mayoría no presuponen que ese Derecho, promulgado hasta ahora en la mayoría de nuestros pueblos, sea esencialmente burgués, y que solo en teoría constituye un equilibrio de los más grandes opuestos intereses de clase.

Mientras el derecho a la propiedad privada sea un principio inalienable promulgado por una Constitución, y que bajo esa estrecha formulación no se puede expropiar o nacionalizar si fuera necesario, jamás existirán fundamentos jurídicos para que las riquezas nacionales puedan tener un beneficio definitivamente social. Mientras las minorías étnico-nacionales y sus respectivas culturas no estén refrendadas en un código legal, jamás habrá condiciones mínimas para garantizar sus más legítimos derechos. Mientras las campañas electorales se realicen con la fuerza del dinero que se aporta a los candidatos, los partidos populares (en su gran mayoría), no podrán acceder no ya al poder, sino ni siquiera al gobierno. Mientras no haya garantía constitucional del derecho al trabajo, la salud y la educación gratuita, no existirá una mínima manera legal de intentar hacer justicia. Pero lo más importante de esas limitaciones es que ellas no pueden ser íntegramente promulgadas y garantizadas dentro de los marcos de la llamada democracia liberal porque en última instancia reducen las posibilidades de ganancia de los sectores más ricos.

Una importante limitación del pensamiento revolucionario lo constituye no percibir la forma sutil en que se ha estructurado legal e históricamente la hegemonía de las clases pudientes. Esa interpretación del Derecho exonera a los tradicionalmente excluidos de la posibilidad de ejecutar en la práctica sus aspiraciones populares.

El análisis de esta situación nos sugiere que los proyectos alternativos de la izquierda no estarán mínimamente completos, si no reconocen que sus fuerzas han sido enajenadas de los procesos políticos y sociales en cada país no solo por su incapacidad para organizar la unidad, sino también por la manera legal en que sus opuestos de clase, los han excluido. En este sentido los programas de izquierda tienen

que estar preparados para imponer a la Derecha y sus seguidores, su propio Derecho y así legalizar, desde un inicio, las transformaciones sociales a que aspira.

Una pequeña reflexión final

El llamado cuarto poder²⁵ también ha tenido un fuerte impacto sobre la izquierda. Bajo una monstruosa cobertura informativa y durante más de dos siglos, la prensa no ha hecho más que construir mitos que han orientado la intuición popular, a conservar los fundamentos del gran poder que propiamente le son contrarios a nuestros pueblos.

Así, el mito del libre mercado, que impide a algunas fuerzas de izquierda ver en la preponderancia del papel del Estado lo que hará establecer las bases del desarrollo en sus respectivos países, se convierte en un freno para otros sectores mayoritarios de la izquierda que nunca compartieron políticas neoliberales pero que tampoco creen en la viabilidad del socialismo. Entre ellos, los de un pensamiento social más avanzado, no ven en el mercado un mal necesario temporal, sino el instrumento de regulación económica que nunca debe ser erradicado. Esas expresiones de la izquierda no comprenden, que el mercado encierra en sí la exclusión permanente de los más pobres, y que sobre la base del principio de su utilización en todas las etapas de transformación social, ningún proyecto alternativo a los males que el sistema capitalista genera, será serio.

El mito de la esencia inmanentemente violenta de la revolución también continúa afectando la unidad de la izquierda. Él debe ser entendido como aquel que impide convencer (y hasta simplemente hablar) a las grandes masas de la posibilidad de destruir pacíficamente los fundamentos del sistema capitalista para suprimir los cimientos que mantienen la dependencia del destino de los pobres a los designios de los ricos. Este fantasma especialmente oculta la necesidad de iniciar transformaciones políticas e institucionales en el país para lograr cambios sociales profundos e irreversibles en beneficio de nuestros pueblos.

²⁵ A fines del siglo XVIII el político británico E. Burke, en una sesión de la Cámara de los Comunes, aludió al "cuarto poder" para referirse, eufemísticamente, al significado de la prensa como medio de influencia sobre la opinión pública.

El mito sobre la democracia liberal burguesa finalmente, como expresión "suprema" de la democracia, ha resultado ser el que limita entender a las fuerzas de izquierda que se debe intentar dar al traste con el sistema, alejándose de la fórmula tradicional de la necesidad de los partidos políticos (que hasta ahora solo ha condicionado la perpetuidad de los más fuertes económicamente), y construyendo grandes coaliciones o sujetos sociales que graven constitucionalmente la "competencia" por el gobierno no en condiciones de igualdad con respecto a los ricos (porque este deseo es imposible conjugarlo en la práctica), sino en aras de garantizar permanentemente el poder de los hasta ahora oprimidos y excluidos.

Esta manera distinta de "construir un nuevo poder", adquiere especial vigencia en las condiciones de una Latinoamérica envuelta en profundas discusiones en torno a aceptar o no su integración económica, asimétrica, en el ALCA, y cuando las fuerzas imperiales, encabezadas por los Estados Unidos, intentan imponer su más estricto condicionamiento político.

Ese concepto dentro de la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la OEA en septiembre de 2001, en Perú, ha desempeñado un papel importante.

En su artículo 19 dictaminó: " (...) la ruptura del orden democrático o alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un estado miembro, constituye, (...) un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno" en el sistema de la OEA. Tal afirmación, que es precisamente el reflejo exacto de la llamada Cláusula Democrática, que aprobó la III Cumbre de las Américas celebrada en abril del mismo año en Canadá, constituye el más claro candado político de cierre a las aspiraciones populares. Con ello se ha legitimado legalmente la democracia representativa sobre la base de la "competencia" entre los partidos políticos, y se ha declarado ilegal cualquier forma de gobierno que interprete la democracia de una manera distinta.

Una vez tendido este cerco en el ámbito regional, a la izquierda le quedan tres opciones principales: o entregar las riendas de su lucha como han hecho muchos, o tomar el camino de las armas por el que han optado otros, o aprovechar su astucia en la utilización de los instrumentos que la legalidad burguesa le brinda (lo que no la exonera del riesgo de también ser atacada), para rescatar del concepto liberal de

democracia la arista con la que él casi nunca cuenta. La politología liberal descarta que se pueda provocar una "ruptura del orden democrático" (según la manera en que ha sido estructurado hasta hoy) o una "alteración del orden constitucional" (parafraseando el citado artículo de la referida Carta Democrática) no mediante la fuerza, sino a través del apoyo popular expresado en las urnas.

Esto no sólo es necesario lograrlo, sino que es posible, y lo ha demostrado en una primera instancia la revolución pacífica y democrática de Venezuela, que rechazó la democracia representativa como su forma exclusiva de gobierno. En los artículos 1, 6, 67, 70 y 71 de la Constitución de la República Bolivariana por ejemplo (aprobada por el voto popular en diciembre de 1999), se refrenda el pluralismo político, en lugar del otrora exclusivo pluripartidismo, que da opciones electorales tanto a partidos políticos como a grupos sociales o de electores, dispuestos a presentar sus candidatos. El carácter participativo del gobierno y de las entidades políticas que componen la República, así como la rendición de cuentas periódicas de los representantes a sus electores, son otros de los rasgos nuevos más importantes.

Pero esta opción, potencialmente realizable por las fuerzas populares en Latinoamérica, se tiene que enfrentar con la clara convicción de que una cosa es gobierno y otra poder político, y que se puede acceder al primero, sin conquistar el segundo. La incompreensión en su justa medida de esa diferencia, junto a otras presiones de carácter externo, ha traído como consecuencia que experiencias de gobiernos de izquierda o centroizquierda en Bolivia, Guatemala, República Dominicana y Perú, o en Chile y Argentina por citar solo algunos, hayan culminado en lamentables fracasos o no puedan darle a sus respectivos pueblos las soluciones que ellos necesitan.

Ninguna fuerza revolucionaria, a escala mundial, conservará su gobierno, si de manera cautelosa no logra movilizar masivamente a los sectores populares no para expropiar, confiscar o nacionalizar "a lo socialista", de manera inmediata, en aras de sentar las bases políticas que permitan iniciar el desmonte paulatino del poder de la clase capitalista. En ese empeño, las propuestas de la izquierda no deben quedarse en los extremos. Tal vez podamos aliarnos con el centro e incluso con algunos sectores de la derecha, en una primera etapa más o menos prolongada, pero con la condición de que

las grandes alianzas se concerten bajo la aceptación previa de nuestros programas, no porque sean los nuestros, sino porque serán los únicos verdaderamente revolucionarios y humanos.